

Notas del mes

Cuaderno de crisis / 4

Por *Albert Recio Andreu*

Crisis económica, crisis ecológica y el resurgimiento del keynesianismo

Por *Jordi Roca Jusmet*

Días de diario

Por *Juan-Ramón Capella*

La especulación en el París del Segundo Imperio

Por *José A. Estévez Araújo*

Apropiación de un holocausto

Por *El Primo*

Penas de cárcel y rescates de miles de millones: Enron, Citigroup y otras historias

Por *José A. Tapia Granados*

La Biblioteca de Babel

Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica

Joaquim Sempere

Ruling America. A History of Wealth and Power in a Democracy

Steve Fraser y Gary Gerstle (eds.)

Activistes de la pau⁴

Enric Prat Carvajal

En la pantalla

Revolutionary Road

Sam Mendes

¡Al ataque!

Era previsible: la reforma del mercado laboral vuelve a plantearse como la gran solución patronal a la crisis económica. Durante los primeros meses de la crisis, cuando todas las evidencias mostraban que ésta es una crisis generada por financieros, promotores inmobiliarios y especuladores de todo tipo —o sea capitalistas— nadie se atrevía a abrir demasiado la boca. Como mucho para rogar que el estado interviniera para salvar sus dineros. Los neoliberales estaban deprimidos y desorientados y todos los focos apuntaban al sistema financiero.

Pero a medida que pasa el tiempo, la crisis se agudiza en todos los sectores y el desempleo se masifica renace la oportunidad de volver a la carga con los temas laborales. Empezando por el despido libre (de momento no se atreven tanto con los salarios porque hay demasiadas evidencias que una caída brusca de salarios agudizaría la caída de la demanda).

El pistoletazo de salida no vino del sector privado, sino de un servidor público. En concreto, del Gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, en una conferencia ofrecida a la Federación de Usuarios de las Cajas de Ahorro (se puede encontrar el discurso completo en la web del diario *Público*). El discurso no tiene desperdicio y es una buena muestra del tipo de argumentación a la que nos tienen acostumbrados muchos expertos. Después de repasar las causas del crecimiento económico pasado y de la crisis actual —en lo que no entraré— llega al meollo de la cuestión. El argumento central es que para salir de la crisis la cuestión básica es el aumento de la productividad y conseguirlo “pasa inevitablemente por llevar a cabo reformas estructurales en numerosos campos”. Pero cuando uno esperaría, cuando menos, una enumeración de las mismas, el conferenciante da un quiebro y plantea que “Hoy, por razones de tiempo, dedicaré exclusivamente mi intervención a la reforma de las instituciones laborales”. Planteado así, es evidente que se está sugiriendo que éste es el tema más urgente a resolver, y que el resto de “reformas estructurales necesarias” pueden postergarse en el tiempo. Aun siendo discutible esta premisa uno esperaría que en este caso se procediera a un análisis más completo de las instituciones del mercado laboral, de las líneas de fuerza que lo delimitan, pero casi todo el análisis se focaliza en el tema de la regulación del despido, alegando que las indemnizaciones por despido “desincentivan la movilidad de los trabajadores por miedo a perder los derechos adquiridos”. Frente a este modelo, el Sr.

Gobernador plantea como alternativa el modelo danés o el austriaco en los que ciertamente el despido no recibe indemnización pero en contrapartida hay una amplia cobertura social. Pero olvida plantear que el paso a un modelo de este tipo supondría a la vez reformas laborales, de protección social y de impuestos. Algo difícil de esperar de alguien que en su propio discurso ha atribuido parte del mérito del dinamismo español a que “tenemos un sector público con un peso relativo más reducido que el de otros países europeos”. Olvida por ejemplo que (según datos de Eurostat) mientras el gasto social español en 2006 representaba el 20,9% del PIB, el de Austria se elevaba al 28,5% y el de Dinamarca al 29,1%. No hay nada en su discurso que abone una propuesta de estatalización a la nórdica. Más bien parece, como viene siendo habitual en los discursos de los burócratas europeos, que se tomen ejemplos puntuales fuera de contexto para apuntalar argumentaciones en las que el objetivo es otro. Y parece fuera de dudas que abaratar el despido en España, al menos en el marco actual, difícilmente daría lugar a otro tipo de “compensaciones”.

Al menos esto es lo que han entendido las organizaciones patronales que animadas por estas declaraciones ya se han lanzado a la ofensiva para avanzar en lo que ha constituido una línea estratégica de la patronal: el despido libre sin costes, sin condicionantes. De hecho el despido libre ya existe en España, varía su coste según sea el tipo de contrato y la forma de despido. Las sucesivas reformas laborales no sólo han favorecido la temporalidad del empleo, también han abaratado los costes del despido de los empleados fijos estableciendo una gradación según el despido sea por un ERE —20 días por año (el 50% a cargo del Fondo de Garantía Salarial en el caso de las pymes)—, de 33 días en los contratos fijos creados a partir de 1996, 45 días en caso de despido improcedente (la reforma de 2002 prácticamente ha eliminado los salarios de tramitación, los que debía pagar el empresario entre el día de despido y el de la celebración del juicio), y cero para los despidos disciplinarios. Si se paga más es porque se negocia, sólo en las grandes empresas donde abundan los recursos y donde, a menudo, los despidos obedecen más a estrategias empresariales que a la simple situación de crisis. Los estudios comparativos muestran que en nuestro país algunos despidos son más caros pero su procedimiento es más sencillo y menos garantista. Lo que pide ahora la patronal no es cambiar el procedimiento sino abaratarlo y hacerlo aún más fácil, especialmente eliminando la autorización administrativa de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), que constituye un medio que concede tiempo y resortes a la acción colectiva. Quizás lo que pretenden es aprovechar la coyuntura. O simplemente ahorrarse la necesidad de dedicar una parte de su patrimonio a indemnizar a las víctimas de su propio fracaso (o de su irresponsabilidad). El neoliberalismo impuso una traslación del riesgo desde la empresa a los trabajadores y al conjunto de la sociedad. Las ayudas públicas al sector financiero, el aval

público a los préstamos, está elevando aún más esta transferencia de riesgos, y la gratuidad del despido no deja de ser otra variante de lo mismo.

Que el abaratamiento del despido no va a generar ningún empleo es evidente. Puede incluso que en el corto plazo contribuyera a aumentar los despidos. Ya se sabe que cuando algo sale gratis se producen efectos imprevisibles. Por eso hay razones para oponerse lisa y llanamente a la propuesta. Y empezar a denunciar la enorme rigidez que en el funcionamiento de la economía real introducen las prácticas empresariales. Al fin y al cabo muchas de las demandas de flexibilidad laboral no son otra cosa que los intentos de respuesta empresarial a la propia rigidez del sistema productivo. En parte por mero instinto de clase. Pero en parte también porque la tecla que tocar es mucho más fácil cuando se trata de lo laboral. Es más sencillo conseguir que gente sin poder, acogotada por la necesidad de un empleo, acepte rebajar sus demandas, se adapte a una pérdida de derechos, que negociarlo con instituciones poderosas. Para muchas pymes esto resulta evidente, su poder de negociación con grandes clientes, con proveedores de “inputs” esenciales, o con instituciones financieras es nulo. También para los propios Gobiernos resulta más factible que los asalariados y las organizaciones sindicales transijan ante una “emergencia nacional” que no que lo hagan poderosas instituciones internacionales o grandes empresas transnacionales. Y aunque de momento el Gobierno Zapatero siga defendiendo que nada de reforma sindical, no podemos esperar una actitud demasiado firme a medida que se consolide el desempleo y el Gobierno necesite votos para aprobar propuestas esenciales (por ejemplo el Presupuesto). La larga sombra de CiU o el PNV planean ya sobre la posibilidad de una nueva embestida. La movilización patronal ha servido para calentar motores, diseminar discurso. Quizás también como cortina de humo para impedir otro tipo de debates.

Oponerse a la reforma sin más puede resultar a la larga insuficiente. Sin duda la pueden colar dada la cultura política de las elites políticas y la correlación de fuerzas en el Congreso. La única posibilidad de eludirla es la existencia de una poderosa resistencia social que amenace con movilizaciones y pérdidas de votos a quien ose llevarla a cabo. Y para que ello ocurra es imprescindible tener un discurso de fuerte calado. Basado a mi entender menos en las cuantías de las indemnizaciones (al fin y al cabo una fuente de enormes desigualdades entre grupos de asalariados) y más en los mecanismos de regulación del despido y en los sistema de protección social. El Presidente del Banco de España lanzó una provocación de mala fe, está ha sido siempre la línea de los técnicos de la institución. Pero responder al reto exige generar un discurso alternativo que vaya más allá del “Virgencita, virgencita, que me quede como estoy”. Requiere articular propuestas que supongan alterar el actual reparto de riesgos sociales, que supongan crear barreras efectivas a los despidos arbitrarios y que supongan efectiva protección social a las víctimas

inevitables de la crisis actual. Siempre se ha dicho que el ataque es la mejor defensa. Quizás llevamos tiempo en continua derrota porque nadie es capaz de plantear más que respuestas defensivas a los ataques de la patronal y sus servidores.

Finanzas y riesgo colectivo

Hemos perdido la medida de la enorme cantidad de fondos financieros entregados a las empresas bancarias en todo el mundo. Sin que de momento se vislumbren resultados claros de esta ayuda masiva, más allá de que ésta ha permitido mantener abiertas (con nombre propio o mediante fusión) a las casas bancarias responsables del problema.

Da la impresión que nadie tiene una idea clara de verdad sobre los criterios de intervención. A excepción de la negativa a nacionalizar el sistema financiero que surge una y otra vez siempre que se pregunta a un “experto” sobre esta eventualidad. La alergia de lo público está tan internalizada en la cabeza de muchos economistas que estos responden a la pregunta sin pensarlo dos veces y casi siempre sin argumentarlo. Y lo cierto es que el aporte de millones de euros no parece haber servido para garantizar la liquidez al sistema económico que justificaba la enorme donación de recursos. Algo que era esperable por dos razones: por un lado, el alto endeudamiento de los propios bancos, necesitados de dinero para cubrir los vencimientos de sus propios créditos y, por otro, su aversión a mantener la política de crédito fácil ante unas empresas y unos consumidores asimismo endeudados. Es posible que las restricciones crediticias acaben por afectar a empresas saneadas, pero esto, como en la guerra, forma parte de los “daños colaterales” derivados del “gran daño central”. Al final los bancos lo que están haciendo es tomar el dinero aportado por el estado para tapar agujeros y colocarlo en inversiones seguras. Es bastante probable que el resultado final va a ser una enorme masa de endeudamiento público que estará en manos de los propios bancos y que significará una enorme transferencia anual de dinero público hacia los mismos. Si no lo remediamos la deuda y las pérdidas de los grandes bancos pueden trastocarse en obligaciones hacia los mismos del conjunto de la comunidad. Una nueva variante de la usura tradicional que ya han experimentado muchos países en desarrollo y que ahora tiene lugar a escala global.

La población doliente tiene muy poca capacidad de intervención en este campo. Somos como el personaje de la “Ventana indiscreta” que presencia impotente un asesinato que se comete en la casa de enfrente. O al menos esta es la posición en la que nos tiene encajonado el actual marco institucional. Pero podemos empezar a pedir a nuestros parlamentarios que planteen medidas de control, que exijan información pública de los planes de

salvamento. Que pregunten por qué no se compran los bancos a su precio de mercado. Que exijan la comparencia de los representantes de la autoridad monetaria para que expliquen cuáles son sus medidas de control. Seguramente habrá pocos parlamentarios dispuestos a ello, pero por alguno habrá. Y también podemos desarrollar alguna iniciativa ciudadana exigiendo información, debates públicos, medidas de control.

Hay demasiado en juego y demasiada lentitud en aplicar medidas. Cuando la evidencia del desastre es patente. Y cuando la de la incompetencia es supina. Por ejemplo en el caso del Banco Central Europeo, presunta autoridad monetaria de la zona euro que, aparte de insuflar liquidez y mover el tipo de cambio (con enorme torpeza: la subida de tipos a principios del 2008 alegando la inflación de las materias primas probablemente agravó la crisis financiera al hacer insostenible las cargas de la deuda de mucha gente), ha sido completamente incapaz de elaborar, sugerir y animar a los estados miembros a llevar a cabo una política común de intervención bancaria. Con el resultado de que cada país ha actuado por su cuenta y el resultado esperable es la persistencia de las incoherencias y del sálvese quien pueda.

Habrà que ver hasta qué punto la propuesta de los países del G 20 europeos de pasar a una regulación estricta de los activos financieros y eliminar los paraísos fiscales se lleva a cabo. De querer, al menos la segunda cuestión debería ser fácil de resolver puesto que una parte importante de los mayores paraísos fiscales son países de la Unión Europea (como Luxemburgo y en menor medida Holanda), colonias suyas (Gibraltar, Jersey, Guernesey, Virginias Británicas, Cayman., Turks y Caicos) o países con estrecha relación comercial (Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco). Por esto no estaría mal que en la campaña de las elecciones europeas se interpelara a los candidatos con esta cuestión. Porque aunque el sistema financiero se presenta como un asunto complejo para iniciados, al final sabemos que en este proceso nos jugamos el tener que pagar a una banca incompetente una renta permanente.

Nos jugamos seguir estando sojuzgados por un capital financiero que lleva demasiados años gestionando la economía como un coto privado y colando como intereses de la colectividad lo que es simple y llanamente su propio privilegio social

Crisis económica, crisis ecológica y el resurgimiento del keynesianismo

Jordi Roca Jusmet

En esta intervención reflexionaré sobre la crisis económica y las respuestas a la misma en el contexto de una crisis ecológica con una dimensión diferente y de solución aún más difícil.

En primer lugar, querría destacar que aunque las dos crisis, la económica y la ecológica, son de carácter muy diferente tienen algo importante en común. La raíz de los problemas de degradación ambiental está en que empresas y consumidores se preocupan de sus costes y beneficios privados pero se desentienden de los impactos ambientales que generan, los cuales recaen sobre el conjunto de la sociedad.

Una de las raíces de la actual crisis financiero-económica es un marco institucional en el que los que toman decisiones muchas veces no tienen incentivos para preocuparse lo suficiente sobre los riesgos y costes sociales de esas decisiones. Esto es así para los que invierten el dinero de otros asumiendo elevados riesgos, para los ejecutivos que tienen sus ingresos blindados pase lo que pase con el negocio que gestionan, para los que cobraban comisiones o ascendían en función de cuanto dinero prestaban en créditos hipotecarios a personas que ingenuamente pensaban que los tipos de interés se mantendrían siempre en mínimos y que los precios de sus viviendas nunca bajarían, para los que piensan que de ir mal dadas ya se socializarán las pérdidas gracias a la intervención de las administraciones públicas o incluso simplemente de los accionistas que tienen “responsabilidad limitada” en las pérdidas, sin que los posibles beneficios tengan ningún límite.

La crisis no ha estallado, desde luego, por problemas ecológicos, ya que los mecanismos de retroalimentación entre problemas ecológicos y dinámica económica son pocos y generalmente muy retardados. Si, por ejemplo, los ecosistemas naturales no pueden absorber las emisiones de gases de efecto invernadero ello no tiene porqué afectar a los negocios privados (y a veces incluso la degradación ambiental genera oportunidades de negocio en nuevas actividades). En cambio, en los mercados es diferente: si la demanda de vivienda no puede absorber una oferta desmesurada, el mercado se acaba hundiendo (como era muy fácil de prever que acabaría pasando en España: lo extraño es que no pasase antes).

El único terreno en el cual parecía —antes de la crisis— que las tensiones entre sistema económico y abuso de la naturaleza podían causar una crisis

económica a corto plazo era en el de la insostenibilidad del modelo energético. El alza de los precios del petróleo (que llegó a los 150\$ el barril hace menos de un año!) parecía imparable y reflejaba tensiones reales entre una demanda creciente y una capacidad de oferta casi al límite y reflejaba también unas expectativas de que la tensión aumentaría en el futuro. El aumento del precio del petróleo tuvo efectos económicos —en el déficit exterior de muchos países, en la dramática alza de los precios de los alimentos,... — pero, sin embargo, la crisis no ha tenido como un factor desencadenante el precio del petróleo: la relación de causalidad ha ido en sentido contrario, es la crisis económico-financiera la que ha disminuido la demanda de petróleo y con ello los precios. Sin embargo, el debate sobre el fin próximo de la era del petróleo debe seguir tomándose muy en serio y me parece irresponsable que el hundimiento de los precios del petróleo se considere una buena noticia económica: menor precio del petróleo significará consolidación de la adicción al petróleo cuando lo que se necesita es una rápida (y nada fácil) transición hacia otro modelo energético. Para mí sería el momento no de alegrarse de que baje el precio de los carburantes sino de aumentar la fiscalidad sobre los carburantes (que por cierto en España es significativamente más baja que en la mayoría de países de la UE): los ingresos fiscales, además, bienvenidos serían para el necesario aumento del gasto público en la coyuntura actual.

La crisis económica ha golpeado de forma tan rápida e intensa y con efectos tan dramáticos sobre la población que uno puede entender que la respuesta dominante sea la de dar prioridad absoluta al crecimiento para volver a los “buenos tiempos”, cuando la economía *iba bien*. Buenos tiempos para muchos pero tiempos de precariedad e insatisfacción para muchos otros; tiempos de desigualdad (con por ejemplo grandes sueldos frente a contratos basura; grandes pelletazos inmobiliarios frente a dificultades para el acceso a la vivienda); tiempos de creciente consumo energético y de insostenibilidad ambiental.

Desde hace muchas décadas ha habido importantes críticas a la identificación entre éxito económico y crecimiento del Producto Interior. Críticas que provienen, además, de muy diversos frentes. La crítica feminista que destaca que toda la actividad no remunerada ligada al cuidado de personas y al trabajo doméstico no aparece para nada en las Cuentas Nacionales. La crítica social que señala que la distribución del ingreso o el nivel de prestaciones públicas son tanto o más importantes que el ingreso per cápita para determinar el nivel de vida de la mayoría de la población. Y la crítica de la economía ecológica que denuncia que la destrucción de recursos naturales y de servicios ambientales no aparece reflejada en absoluto en el Producto Interior Bruto ni tampoco en el PI Neto.

Todos estos debates han generado una potente línea de disensión respecto al objetivo del crecimiento económico que para mí podría resumirse en dos conclusiones:

La primera. ¡Lo que nos debe importar es el bienestar de las generaciones actuales y la perspectiva de bienestar de las generaciones futuras y no lo que pase con el PIB!

La segunda. ¡Dado el actual nivel de consumismo en los países ricos es perfectamente posible pensar en una economía estacionaria o en decrecimiento en la que aumente el bienestar de la mayoría de personas!

Ello no significa, por supuesto, que el decrecimiento sea siempre bueno —la actual crisis económica es obviamente nefasta para muchísima gente! — del mismo modo que el crecimiento no siempre es bueno. La cuestión no es crecer o no crecer sino discutir —y planificar! — qué actividades fomentar y cuáles desincentivar, y cómo distribuir tanto los ingresos y los servicios públicos como el trabajo.

Sin duda, en mi opinión, por poner un ejemplo, en los países ricos debemos buscar un futuro con menos producción y uso de coches (sean más o menos eficientes: el transporte en coche particular es extremadamente intensivo en energía en cualquiera de los casos y provoca muchos otros problemas ambientales; está muy bien que se diferencie fiscalmente entre coches según su potencial contaminador como se decidió en este congreso de diputados para el impuesto de matriculación en España y como se tendría que hacer también con el impuesto municipal de circulación reformando la ley de haciendas locales; pero lo que no se debería hacer es subvencionar ni directa ni indirectamente a la industria del automóvil); también me parece claro que debería reducirse la industria de la publicidad que no hace otra cosa que fomentar el consumismo; en cambio, debería aumentar el gasto en terrenos como la energía fotovoltaica, el aislamiento energético de edificios, el transporte público, la financiación de la atención a las personas mayores, la educación, etc.

En los momentos actuales de crisis ha resurgido —de una forma que no hubiésemos creído hace muy poco tiempo— el keynesianismo. Además, lo que es muy interesante, muchos han visto en el gasto en energías limpias y en conservación ambiental un componente fundamental de una estrategia keynesiana frente a la actual crisis; incluso se ha acuñado el término keynesianismo verde o *new deal* verde. Mi reacción ante este resurgimiento del keynesianismo es ambivalente.

En primer lugar, hay que celebrar el cambio de aires cuando hasta hace poco

toda la ortodoxia económica abogaba a favor de las virtudes del mercado y de una reducción del papel del sector público.

En segundo lugar, coincido totalmente en que es momento de aumentar de forma importante el gasto público en protección social (para reducir los efectos sociales negativos de la crisis), en servicios públicos y en reestructurar la economía para hacerla más sostenible. Los puestos de trabajo que ello genere por supuesto muy bienvenidos serán.

Estos son los aspectos claramente positivos para mí.

Sin embargo, el actual “keynesianismo verde” también tiene sus peligros. Me preocupa que a veces se defiendan las inversiones en lo que podríamos llamar el sector “energético-ambiental” no tanto por su necesidad para una mayor sostenibilidad sino por su posible papel como nuevo “motor de crecimiento económico”; para volver al considerado irrenunciable objetivo del crecimiento económico.

Cuando éste es el planteamiento, puede pasar fácilmente que el argumento “verde” sea oportunista, simplemente una justificación de una actuación determinada sin analizar seriamente su conveniencia desde el punto de vista de la sostenibilidad. Un ejemplo claro —ya apuntado— es la apuesta por la industria automovilística como “sector de futuro” aunque sea con coches más eficientes o coches eléctricos: está bien que la industria investigue en coches más eficientes y en coches con combustibles alternativos pero un futuro más sostenible pasa necesariamente por una reducción del uso de coches en los países ricos.

Lo que puede ser una consecuencia de la “reestructuración ecológica de la economía” —generar actividad económica y requerimientos de trabajo— no debe considerarse como el objetivo en sí mismo puesto que un camino hacia una mayor sostenibilidad ha de comportar también —o incluso sobre todo— cambios que no generan actividad económica y requerimientos de trabajo sino que los reducen: mayor durabilidad de los productos, menos consumismo, mayor austeridad en los países ricos. (Además, en el caso español, la disminución del consumismo es necesaria no sólo por cuestiones ambientales sino de mera sostenibilidad económica si tenemos en cuenta el enorme déficit de la balanza por cuenta corriente española).

Finalmente, una reflexión sobre el déficit público. No creo que sea en absoluto el momento de dar prioridad al equilibrio presupuestario pero tampoco debería frivolizarse sobre el déficit público. En el contexto actual, el de los países de la zona euro, el déficit público se financia con deuda pública. Un optimista keynesiano puede pensar que esto no es problemático ya que si el

déficit público es exitoso generará crecimiento económico y este crecimiento servirá para pagar el servicio de la deuda. Sin embargo, si uno es escéptico sobre las posibilidades y sobre la propia deseabilidad del crecimiento, entonces la carga futura de la deuda, que puede representar un porcentaje importante de la renta y del gasto público —sobre todo si se dispara su coste en caso de surgir dudas sobre el cumplimiento del Estado con los pagos—, es más preocupante.

Una conclusión clara es que no hay que disminuir en absoluto la presión fiscal. Al contrario, en mi opinión, la tendencia debería ser —prudentemente— aumentar la recaudación fiscal: ante todo, revisando la actual fiscalidad favorable para los ingresos de capital; y aumentando también la fiscalidad sobre los ingresos medios y elevados. La mayor fiscalidad sobre los mejor situados (con la pérdida de poder adquisitivo privado que comportaría para algunos) tendría efectos reductores sobre la desigualdad y el consumismo y tendría como contrapartida la posibilidad de una mayor oferta de protección y servicios públicos sin crear una enorme carga para el futuro.

Se deberían también dar pasos decididos hacia la fiscalidad ambiental (o alternativamente a la venta —y no distribución gratuita como hasta ahora— de permisos de contaminación) para penalizar diferencialmente los consumos que generan más contaminación. El objetivo principal de la fiscalidad ambiental no es desde luego recaudar dinero sino incentivar cambios de comportamiento: pero en momentos en que las necesidades de gasto son tan importantes, bienvenidos serían también los ingresos fiscales obtenidos.

En definitiva, y a modo de resumen, en mi opinión no debemos pensar en respuestas a la crisis económica que olviden la crisis ecológica. Ante la actual crisis económica no deberíamos aparcar las críticas al objetivo del crecimiento económico sino que la crisis debería ser una oportunidad para poner en primer plano las cuestiones distributivas y el debate sobre qué actividades incentivar y cuáles desincentivar.

[Intervención en la jornada sobre Crisis económica y alternativas, organizada por el IU-ICV en el Congreso de Diputados, Madrid, 20 de febrero de 2009]

3/2009

En el interior del PP

Que las decisiones administrativas tienen un valor económico es una de las pruebas a que están sometidos los sistemas políticos, resguardados cuidadosamente del control popular y por tanto bastante ciegos ante los negocios mafiosos. El control de muchas actividades impropias o delictivas queda en las casi siempre atadas manos de los funcionarios públicos del Tribunal de Cuentas y de Poder Judicial. Ello da lugar a episodios o prácticas continuadas de corrupción que afectan sobre todo al plano local. Es en ese ámbito donde la mafia económico-política encuentra *el terreno* ideal de *operaciones*, para sus *construcciones*.

Ninguno de los dos grandes partidos está libre de la actuación de desaprensivos. Pero el Partido Popular aparece, en estos momentos, como una especie de *coto* particular. Ciertos “casos” se eternizan en los tribunales, como los que afectan al gafasoleado *Fabra*, sempiterno capo de Castellón; otros parecen alcanzar a personas destacadas del partido en la comunidad valenciana, incluso pertenecientes a cordadas políticas contrarias. Y los casos que se dan en la comunidad de Madrid, en que distintos clanes del mismo partido en el poder en esa comunidad amagan con arrojarse lodo los unos a los otros, y con expresiones —las que resultan de las escuchas telefónicas decretadas por los jueces— que los muestran como vulgares matones, y no sólo como *negociantes*, siempre traficando influencias en busca de adjudicaciones de obras y de privatizaciones —ahora las apetitosas aguas de Madrid—, superan lo que cualquiera podía suponer. El PP no ha encontrado mejor política para minimizar los daños que arremeter contra jueces y fiscales: tratar de atemorizarles. Si lo consiguieran amordazarían la democracia, pero por lo visto no les importa.

La mayoría nunca pensó —algunos nos lo temimos— que la descentralización administrativa abriría paso a mafias locales. En mi modesta opinión una república bien ordenada tendría que repensar el reparto de competencias a las comunidades autónomas, que tan caro le resulta al contribuyente en comisiones a políticos y en ejércitos de funcionarios que jamás fueron necesarios.

La ignominia de Madrid sólo tiene un efecto beneficioso: dejar malparada en sus ambiciones políticas a la señora bajo cuya responsabilidad última se perpetrán muchas de esas prácticas poco elegantes, por dejarlo en eso. La

señora Aguirre, cuya fotografía los madrileños que la votaron hubieran debido mirar bien —esa sonrisa que no se traduce en los ojos, esa dura línea vindicativa de los labios—, ya mostró su modo de hacer con la entrada de su consejero Lamela como caballo siciliano en las urgencias hospitalarias madrileñas, aterrizando a los médicos. A ella, a quien corresponde la responsabilidad política última, se le debe que hoy *morir en Madrid* entrañe un grave riesgo añadido de sufrimiento. Que esa señora se postule como candidata a dirigir el principal partido de la oposición es hoy tan descabellado que, mira por dónde, la corrupción política produce —eso sí, a costes altísimos— resultados inesperados.

La querrela del PP contra el juez Garzón y la famosa cacería en la que el cazador Bermejo resultó cazado —falta de mano izquierda con los jueces mediante—, con su enorme impacto político, obligan a pensar. Pues pensemos. La dimisión y cese de Bermejo le da al gobierno un plus de seriedad. “Aquí cumplimos”, nos viene a decir. Pues veamos el otro lado. ¿Por qué sigue Fabra inmutable en su puesto? Pues porque tiene el apoyo del presidente de la Comunidad Valenciana, Camps. Por algo lo debe tener, porque de otro modo no se explica. Y ¿por qué puede apoyarle Camps, cuando eso es un coste político serio? Pues porque Camps es necesario para Rajoy: éste, sin su apoyo, no podría seguir presidiendo el PP. De modo que las cosas están así: Rajoy prisionero de apoyos nada deseables. Y entretanto asoma un problema con la tesorería del PP. La pregunta: ¿sólo hay por ahí una pandilla de indeseables a los que la actual dirección del PP no quiere retirar el apoyo, o hay algo más sistémico, más adentro del partido? En manos de los jueces están las cosas. Menos es nada.

Imperatores supra lex regunt

En referencia a la administración Bush, responsable de tantos delitos internacionales e internos, Obama ha dicho que es preciso mirar hacia delante y no hacia atrás. Eso quiere decir que el actual Imperator es en eso igual que los demás.

Ya Bush padre consiguió que Clinton ordenara no investigar las irregularidades y mentiras de su mandato. *América primero*. Ahora el actual presidente no está dispuesto a que se persigan las autorizaciones a la tortura (y específicamente la preferida, *la bañera*, que los antifranquistas recordamos bien), las atrocidades en la guerra de Iraq, y un muy largo etcétera.

Tampoco se sabrá por ahora qué ocurrió realmente el 11 de septiembre de 2002. Sabemos —gracias a cámaras oportunas— que dos aviones se estrellaron sobre las Torres Gemelas de Nueva York. Y hemos visto a ciudadanos norteamericanos arrojarse al vacío para no morir abrasándose.

Pero el caso de los atentados neoyorkinos, que permitió entrar en guerras a un presidente votado como no intervencionista en política exterior, presenta demasiados puntos oscuros. Como el derrumbamiento en vertical de *tres* edificios —contra uno de los cuales no se estrelló nada— de una forma que sólo se puede atribuir a la demolición controlada. O ese avión presuntamente estrellado contra el Pentágono, del que no fue posible recuperar los restos de los motores pero sí los del equipaje de los supuestos pasajeros. Probablemente la fábula de las Torres Gemelas ocupará a los historiadores del futuro, pero nadie se atreve a que ocupe las páginas de los diarios del presente.

La inexigencia de responsabilidades a Bush y a su banda significa, por segunda vez en pocos años, que la Presidencia norteamericana se sitúa por encima de la ley. Justamente lo contrario de lo que propugnaban los padres de la patria de los norteamericanos. Obama no es Bush, cierto. Pero ya ha perdido su crédito. No va a moralizar en serio la administración norteamericana. También él queda por encima de la ley. Nos hicimos algunas ilusiones, aunque menos que los votantes norteamericanos.

Inscripción de fetos malogrados

Entre las necesidades expresadas por la gente aparece una nueva, no necesariamente antiecológica: dar nombre a los fetos malogrados para que sea posible que tengan un sepelio como si fueran personas. Y numerosas personas pagadas por los contribuyentes van a elaborar, tras deliberaciones y estudios, una propuesta en este sentido. Todo sea para bien. Pero que no se limite a los fetos: también debería valer los abortos, para partes del cuerpo humano, para animales de compañía y qué sé yo qué más. La oreja de Van Gogh debiera haber tenido un nombre y no ser conocida por un grupo musical en este mundo al revés. ¡Venga, un registro más! Con su registrador, sus administrativos, su espacio amueblado, su ventanilla y sus tasas.

Gobernador independiente se independiza

El Gobernador actual del Banco de España, una de esas autoridades *independientes* del neoliberalismo, que no tiene que rendir cuentas a nadie, ha aprovechado la coyuntura para pedir el abaratamiento del despido. No está en sus atribuciones hablar de eso, pero si le tosemos aludirá a su libertad de expresión. Sacrosanta. Que se vaya.

La especulación en el París del Segundo Imperio

José A. Estévez Araújo

La editorial Akal publicó hace unos meses un libro del geógrafo y urbanista David Harvey, titulado *París, capital de la modernidad*. La mayor parte del libro se centra en el periodo 1848-1870, durante el cual Haussmann fue prefecto de París y ejecutó su ambicioso programa de reforma urbanística de la ciudad. Harvey analiza de forma independiente y, a la vez, articulada, los diversos aspectos de la vida social parisina de la época: el trabajo, la situación de las mujeres, el ocio, el progreso técnico, el comercio... Pero lo que más sorprende es el análisis de los sectores inmobiliario y financiero. Pues se ponen de manifiesto muchas analogías con las circunstancias que desencadenaron la actual crisis financiera (y que son intencionalmente subrayadas por el autor).

La cuestión que se plantea a propósito de estos sectores es cuál fue el motor que hizo posible que se materializaran las profundas reformas proyectadas por Haussmann. ¿De dónde se obtuvieron los recursos financieros y materiales? ¿De dónde se sacó la fuerza para llevar a cabo las expropiaciones o el impulso para construir los nuevos bulevares? La respuesta a esas preguntas se resume en una palabra: “especulación”. Zola dedicó al tema dos de sus novelas, *La jauría* y *El dinero*. En la segunda, el personaje que encarna al especulador, Saccard, dice: “La especulación es el mecanismo central, el corazón mismo de una enorme aventura como la nuestra. Sí, atrae la sangre, la toma en pequeños arroyos de cualquier fuente, la devuelve en todas direcciones formando ríos y establece una enorme circulación de dinero”.

La metáfora de la sangre de Zola se adecua perfectamente a las nuevas instituciones financieras que surgieron durante el Segundo Imperio: a los bancos que crearon los hermanos Pereire, muy diferentes de la “haute banque” de los Rothschild. En particular, describe muy gráficamente lo que los Pereire llamaban la “asociación de capitales”, que consistía en la captación del ahorro nacional de cara a movilizarlo de forma centralizada para la financiación de grandes proyectos.

Sus dos bancos emblemáticos fueron el Crédit Mobilier y el Crédit Foncier. El primero era un banco de inversión industrial y el segundo se dedicaba al mercado inmobiliario e hipotecario. Los Pereire crearon un “holding” en el que los bancos concedían préstamos a bajo interés a las empresas del grupo para financiar proyectos en las que éstas obtenían enormes beneficios. De ese modo, el dinero aportado por los ahorradores era remunerado muy por debajo de los beneficios que se obtenían de las inversiones. Al final, el imperio de los

Pereire se desplomó como consecuencia de la crisis financiera de finales de los sesenta, pero el nuevo sistema permaneció implantado hasta nuestros días. Buena muestra de ello es el Crédit Lyonnais, que fue creado en 1863 a imagen de los nuevos bancos de los Pereire.

Los nuevos instrumentos sirvieron para financiar las obras de Haussmann y se combinaron con una especulación inmobiliaria a gran escala centrada en las compras de terrenos y la construcción de edificios en las nuevas calles de París. Los especuladores se beneficiaron en muchas ocasiones del conocimiento anticipado de los futuros planes de reforma urbana, para adquirir terrenos que, luego, veían multiplicado su valor. Los propios hermanos Pereire compraban terrenos a bajo precio en lugares que, posteriormente, ellos mismos eran los encargados de conectar con los nuevos bulevares.

Durante el mandato de Haussmann floreció el negocio de los promotores inmobiliarios por encima del de los antiguos propietarios de pisos. Los primeros buscaban obtener un beneficio del aumento del valor del suelo y la vivienda, en lugar de rentas por alquileres. La especulación dio lugar a una segregación espacial, con la construcción de barrios burgueses y zonas exclusivamente comerciales y financieras. El precio de los inmuebles o el valor de los alquileres expulsaron del centro de París a las personas con rentas más bajas y a las actividades industriales.

A todo eso se unió la “contabilidad creativa” de Haussmann y la especulación inmobiliaria practicada por el propio ayuntamiento. Leyendo a Harvey, casi puede decirse que Haussmann fue un pionero en las prácticas de “centrifugación de la deuda”. Es decir, en la invención de procedimientos para que la deuda de la que deben responder las entidades públicas aparezca, en realidad, como deuda de otras entidades y no se contabilice como tal. Una de esas prácticas consistía en no pagar a los constructores hasta después de que entregaran las obras. De ese modo, eran éstos quienes tenían que endeudarse para financiarlas (a veces con la garantía del propio estado).

El tinglado funcionó durante unos años, pero luego llegó la crisis financiera, la destitución de Haussmann, la crisis de la construcción, el paro y una deuda pública de 2.500 millones de francos pesando como una losa sobre la ciudad de París. Cosas todas que recuerdan bastante diversos aspectos de la situación actual. Aunque hoy en día las instituciones financieras mueven tal cantidad de fondos que se convierten en abismos insondables cuando el sistema cae en bancarrota (nunca mejor dicho).

Apropiación de un holocausto

El Primo

Comparto la idea de que el resultado final de la modernización no puede ser evaluado sin tener en cuenta lo que conocemos como Holocausto. El libro de George Steiner *En el castillo de Barbazul* es, en ese sentido, una referencia obligada: según Steiner, la disciplina de la tortura y la muerte puesta en práctica en los campos nazis tendría su raíz en la propaganda cristiana de los tormentos del infierno. Por eso no es casual que Pasolini ordenara las fases del exterminio que representó en *Salò* siguiendo la pauta de los círculos (*gironi*) del infierno descrito por Dante en su *Divina Comedia*.

El problema está en que ese *test* fundamental del proyecto moderno está siendo objeto de una manipulación política que bloquea cualquier posibilidad de análisis medianamente aceptable. Esa manipulación consiste en reducir el holocausto al genocidio infringido a los judíos e identificar a sus víctimas con el estado de Israel para, a continuación, sacar todo el jugo posible de la mala conciencia de una cultura occidental y moderna que arrastraría la culpa del holocausto por los siglos de los siglos. O sea: el holocausto como coartada de una política de expansionismo militar que, paradójicamente, hace recaer la culpa de los muy cristianos nazis sobre la fracción del mundo árabe que resiste a dicho expansionismo.

Es bueno recordar, por eso, que también la etnia gitana, así como los mendigos, los homosexuales y todos los afectados por algún tipo de minusvalía física o psíquica, fueron tan víctimas del holocausto como los propios hebreos. Ahora mismo, en Italia, el populismo ultrarreaccionario de Berlusconi está dando fuerza de ley a una implacable persecución de los gitanos. ¿No estamos, de nuevo, ante un Holocausto? La retórica es la misma: ellos son los culpables de la pobreza, la inseguridad y los mayores delitos. Y procedimientos como los campos de internamiento avalados por la Unión Europea se parecen tanto a los del régimen nazi como para pensar que un tipo como Berlusconi no tendrá el menor reparo en dar el paso siguiente.

El Holocausto es un hecho histórico de tal magnitud que merece ser tomado mucho más en serio.

Penas de cárcel y rescates de miles de millones: Enron, Citigroup y otras historias

José A. Tapia Granados

La revista *Fortune* publica anualmente la lista "Global 500" en la que se enumeran las 500 empresas más grandes del mundo según ventas brutas anuales. En las primeras posiciones de la lista Global 500 que se publicó a comienzos de 2008, encabezada por la cadena de supermercados norteamericana Wal-Mart, figuran empresas que se han hecho tristemente famosas en estos últimos meses por sus quiebras, absorciones o nacionalizaciones. General Motors, ahora al borde de la quiebra, ocupa la novena posición en Global 500, mientras que Ford ocupa el puesto 13. Bancos y grupos financieros que han quebrado, han sido absorbidos o han sido puestos bajo control gubernamental también ocupan altas posiciones en Global 500. Por ejemplo, Citigroup ocupa el puesto 17 de la lista, Bank of America el 28, JPMorgan el 32, AIG el 35, Goldman Sachs el 61, Morgan Stanley el 62, Merrill Lynch el puesto 100, Lehman Brothers el 113, Fannie Mae el 161 y Freddie Mac el 162. Bancos extranjeros que han sido sustancialmente intervenidos o nacionalizados por sus gobiernos son por ejemplo el banco suizo UBS o el Royal Bank de Escocia, que ocupaban los puestos 31 y 36, respectivamente.

Debido a la pérdida proporcional de ventas en el mercado de automóviles de EE.UU. frente a las empresas japonesas y coreanas, pero sobre todo por la caída abismal de las ventas de coches en los últimos meses, General Motors, Ford y Chrysler están al borde del abismo y han solicitado al gobierno estadounidense decenas de miles de millones para evitar la quiebra. Independientemente de lo que ocurra con los tres grandes de la industria automovilística estadounidenses, sus nombres ya forman parte de la lista de empresas importantes que se han hundido o han sido salvadas por el Estado en 2008. El que los fabricantes de automóviles europeos también hayan pedido ayuda financiera a los gobiernos de sus países es una prueba más del carácter mundial de la actual crisis económica.

El banco Bear Stearns fue el primer nombre de la lista cada vez más larga de corporaciones financieras importantes que quebraron o fueron rescatadas por el gobierno de EE.UU. en el 2008. Uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, con más de 15.000 empleados, en marzo pasado no pudo ser salvado por la ayuda del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y, al borde de la quiebra, inmediatamente fue adquirido por JPMorgan a un precio de 10 dólares por acción, muy por debajo del precio máximo de 133 dólares por acción al que Bear Stearns había cotizado pocos meses antes. Fannie Mae

y Freddie Mac, las dos corporaciones especializadas en adquisición de hipotecas y conversión de hipotecas en activos negociables, fueron nacionalizadas a primeros de septiembre. El grupo de seguros AIG fue nacionalizado una semana después. Merrill Lynch también se vino abajo y fue comprado a precio de ganga —y con garantías de la Reserva Federal— por Bank of America. Lehman Brothers también quebró en septiembre.

Inmediatamente después de que el plan TARP (por sus siglas inglesas) de compra de activos comprometidos propuesto por el Secretario del Tesoro de EE.UU. Henry Paulson y el presidente Ben Bernanke de la Reserva Federal fuera aprobado por el Congreso —con enmiendas importantes de los políticos para hacerlo más digerible—, cada uno de los nueve bancos más grandes de EE.UU., incluyendo Citigroup y Bank of America, recibió 25.000 millones de dólares a mediados de octubre. Puesto que el dinero del erario público compró participaciones en esos bancos, el gobierno de EE.UU. es ahora accionista de estas instituciones financieras. La operación es en esencia lo que tradicionalmente se ha llamado nacionalización, aunque este término ha sido cuidadosamente evitado por los políticos. Sea como fuere, quizás para no parecer excesivamente “entrometido”, el Departamento del Tesoro de EE.UU. no ha enviado ningún representante gubernamental a sentarse en el consejo de administración de estos bancos “inyectados” con miles de millones de dólares de dinero de los contribuyentes.

Los 200.000 millones de dólares que los principales bancos estadounidenses recibieron en octubre parecen haber sido simplemente un ítem más en la lista de medidas estabilizadoras que no sirven para lo que supuestamente deberían servir. Primero fue el plan de reactivación económica que se pasó en febrero del 2008, con un costo presupuestado de 152.000 millones de dólares para el 2008 y otros 124.000 millones para los diez años siguientes. Por supuesto, nadie puede decir cuál sería el estado actual de la economía de EE.UU. si el plan de reactivación de febrero del 2008 no se hubiera pasado. Pero dada la situación a finales del 2008, parece obvio que el plan de reactivación de febrero no fue muy eficaz para prevenir la recesión.

En un contexto de cambios continuos en los planes de salvamento de los bancos y estabilización de los mercados financieros —el plan original TARP de compra de “activos tóxicos” fue abandonado y en vez de eso el Tesoro adquirió participación directa en los grandes bancos— se aplicaron diversas medidas que resultaron ineficaces. El grupo de seguros AIG fue nacionalizado en septiembre, recibiendo una línea de crédito de emergencia de 85.000 millones del Tesoro de EE.UU.. Sin embargo, a primeros de octubre otros 38.000 millones tuvieron que ser agregados al paquete cuando se puso de manifiesto que los 85.000 millones iniciales no eran suficientes. Se ha estimado que cuando la operación finalice, el erario público de EE.UU. habrá

prestado un total de 150.000 millones a AIG. Citigroup, el mayor grupo bancario del mundo, es el ejemplo más reciente de los intentos fallidos de estabilización de los mercados financieros. Además de recibir 20.000 millones más del gobierno de EE.UU. después de una inyección inicial de 25.000 millones a mediados de octubre, el complejo plan de salvamento a Citigroup demanda del gobierno de EE.UU. cerca de 306.000 millones en avales y garantías.

Si la crisis económica se terminara ahora mismo, ya habría producido un enorme daño a la gente común. Además de los puestos de trabajo que se han perdido, las perspectivas de jubilación han sido dañadas seriamente por la caída del valor de los fondos de jubilación y muchos de quienes se creyeron los cuentos de hadas de los valores de bolsa siempre en ascenso o el precio de los inmuebles que nunca podría bajar han perdido los ahorros de toda la vida.

Como es la historieta que da algún fundamento racional y moral a sus actividades, los banqueros y los financieros son verdaderos creyentes en la idea de que los bancos crean abundancia manejando el dinero de los demás. Manteniendo los ahorros de unos y dando préstamos a otros, los bancos proporcionan la sangre que nutre la actividad económica: al menos, eso es lo que nos cuentan. Gracias a la actividad de los bancos se crean nuevos puestos de trabajos y se proporciona préstamos hipotecarios que hacen que el sueño americano de ser propietario de una vivienda pueda convertirse en una realidad para muchos. Esa fantasía, tan bien representada por la película de Frank Capra *It's a Wonderful Life* (*¡Qué bello es vivir!*, se tituló en España), emitida miles de veces por la televisión desde que se produjo en 1946, ha sido materia prima de la cultura americana en el último medio siglo.

Pero los banqueros y los financieros, como los demás, se comportan según las reglas básicas de nuestro sistema económico, siguiendo el interés individual. En años recientes los salarios de los altos ejecutivos de los bancos y las empresas financieras a menudo eran de decenas e incluso centenares de millones de dólares y esos millones tenían que venir de alguna parte. Venían de los beneficios obtenidos por los bancos en las actividades de ingeniería financiera.

La ingeniería financiera es básicamente un sistema de técnicas muy complejas que producen "títulos" —o sea, trozos de papel— conectados muy tenue e indirectamente con la propiedad de cosas valiosas tales como edificios, plantas industriales, carreteras, trigo o petróleo. Estos productos financieros derivados, o *derivatives* como se denominan en Wall Street, se compran y se venden en los mercados internacionales a precios que son muy difíciles de conectar con la economía real. El evangelio económico al uso decía

sin embargo que la información sobre activos y pasivos de las compañías que cotizan en bolsa, los honestos informes de las empresas de contabilidad, la atinada evaluación de las agencias de clasificación crediticia que estiman la fiabilidad de los prestatarios y, sobre todo, la sabiduría de los mercados, hacían que esos precios fueran “fundamentalmente correctos”.

En los últimos quince o veinte años el mercado mundial de productos financieros derivados creció hasta un volumen de cientos de billones de dólares. Las masas enormes de dinero proveniente de diversas fuentes (millonarios individuales, fondos de pensiones, fondos de inversión, países con un superávit de exportaciones como China, naciones productoras de petróleo) buscaban salidas de inversión y los productos financieros derivados prometían buenos rendimientos. Cientos de billones de dólares se invirtieron en esos instrumentos financieros, pero para consternación de quienes poseían derivados respaldados por hipotecas, pasados pocos años “se descubrió” que los títulos probablemente “valían” mucho menos de lo supuesto originalmente. Quienes se enteraban, inmediatamente intentaban librarse de estos instrumentos financieros devaluados, vendiéndolos tan rápidamente como fuera posible, como patatas calientes. Tan pronto como la venta masiva comenzó, los precios cayeron a plomo, en algunos casos hasta cerca de cero. Pero muchos en los bancos y las empresas financieras se habían creído sus propios cuentos de hadas y muchas instituciones quedaron cargadas de títulos ahora invendibles.

En la situación actual sólo la transferencia masiva del dinero del erario público al sistema financiero privado está evitando quiebras generalizadas de bancos y de compañías de seguros de todo el mundo. Irónicamente, el dinero va a las mismas instituciones que lograron beneficios enormes estos últimos años y que pagaron sueldos astronómicos y primas obscenas a sus altos directivos.

Hace apenas ocho años, inmediatamente antes de su quiebra, Enron había declarado ventas anuales de 100.000 millones de dólares, que colocaban a esa empresa entre las veinte o treinta corporaciones más grandes del mundo. Especializada en fuentes de energía, Enron había crecido vertiginosamente durante los años noventa y el prestigio de sus ejecutivos solo era parangonable a sus remuneraciones. En diciembre del 2001 Enron fue declarada en quiebra y varios de sus directivos, Kenneth Lay, Jeff Skilling y Andrew Fastow, fueron acusados y juzgados por múltiples cargos de fraude y conspiración. Ken Lay murió durante el proceso, pero Andrew Fastow y Jeff Skilling están en la cárcel por su participación en el desastre de Enron. Fastow firmó una confesión de culpabilidad y mediante un compromiso de colaboración con las autoridades judiciales consiguió ser condenado a una pena de diez años de prisión que luego se redujo a seis años. Skilling proclamó su inocencia y fue condenado a una multa de 45 millones y una

pena de 24 años de cárcel, actualmente apelada.

Pero, ¿cuáles fueron realmente los delitos de los ejecutivos de Enron? La quiebra de Enron —hasta el 2008 la de mayor entidad en la historia de EE.UU.— hizo que los accionistas perdieran miles de millones y que 20.000 empleados se quedaran sin trabajo y muchos de ellos también sin sus ahorros, que habían invertido en acciones de la empresa. Las acusaciones de las que Fastow y Skilling fueron encontrados culpables incluyeron conspiración, operaciones ilegales de compraventa de títulos por conocimiento privilegiado, declaraciones falsas a interventores, lavado de dinero y fraude bursátil. Sin embargo, no hay que ser un genio de las altas finanzas o de la gerencia empresarial para darse cuenta de que las ideas tras el “éxito” de Enron en los años noventa tenían una llamativa semejanza con las ideas que han alimentado los mercados de productos financieros derivados estos últimos años. La filosofía de Enron era que la empresa no necesitaba realmente tener activos verdaderos. Al final, lo único que había era un montón de deudas.

Los bancos, las compañías de seguros y otras empresas financieras dicen gestionar los riesgos financieros de sociedad mediante la asignación eficiente de capital a las actividades más útiles. Usando su capacidad profesional para decidir qué prestatarios son dignos de recibir préstamos y cuáles no lo son, las entidades financieras cumplen un papel clave en la administración de los fondos de la comunidad. Pero en realidad, las entidades financieras son ante todo negocios y su objetivo primario es maximizar ganancias. Si los préstamos hipotecarios son un buen negocio y los precios de la vivienda están al alza, no importa mucho que el prestatario no pueda pagar, ya que si así ocurre, el préstamo se recuperará de cualquier manera al ejecutar la hipoteca. Con ese razonamiento, el mercado de hipotecas basura creció alimentado por casos como el del jornalero mexicano que trabajaba en tareas agrícolas y que con ingresos anuales de 14.000 dólares y sin saber hablar inglés recibió un préstamo de 720.000 dólares para comprar una casa en California.

Las penas de prisión de Andrew Fastow y de Jeff Skilling contrastan con el tratamiento actual del sector financiero, cuyos ejecutivos hicieron en gran parte lo mismo aunque ahora están libres y recibiendo montones no de millones, sino de miles de millones de dólares. La empresa de contabilidad Arthur Andersen, que se hundió debido al escándalo de Enron, había sido obviamente culpable de ayudar los ejecutivos de Enron a encubrir los aspectos turbios de sus operaciones. Sin embargo, diversos bancos importantes, entre ellos Citigroup, el Royal Bank de Escocia y el Deutsche Bank, también han sido acusados e incluso condenados en procesos judiciales por su complicidad en algunos de los negocios de Enron. Mientras que Jeff Skilling está en cárcel y los que poseían acciones de Enron perdieron su dinero, Vikram Pandit, director ejecutivo de Citigroup, el príncipe Al-Waleed de

Arabia Saudita y los demás accionistas de Citigroup han recibido en préstamos directos y garantías indirectas varios cientos de miles de millones de dólares del gobierno estadounidense, que supuestamente representa a los ciudadanos de EE.UU.

Según se ha informado recientemente, durante 2008 el gobierno de EE.UU. ha asumido cerca de 7.8 billones de dólares en obligaciones financieras directas e indirectas, lo que equivale más o menos al presupuesto acumulado de EE.UU. para 2005, 2006 y 2007. Muchos otros gobiernos están siguiendo el mismo camino. Ese montón descomunal de dinero se está lanzando al agujero aparentemente insondable de las deudas de los bancos, las compañías de seguros y otras corporaciones financieras dirigidas por expertos que han asignado los fondos de sus instituciones “a las aplicaciones más eficientes para la sociedad”.

El dramaturgo alemán Bertolt Brecht se preguntó una vez con sorna: “¿Qué es robar un banco, comparado con fundar un banco?”. La crisis financiera mundial del 2008 parece indicar que su pregunta no iba muy descaminada.

Fuentes

- R. Sorkin y M W. Walsh, “A.I.G. May Get More in Bailout,” *New York Times*, 9 de noviembre de 2008
- Eric Dash, “Citigroup to Halt Dividend and Curb Pay,” *New York Times*, 23 de noviembre de 2008
- “Lay, Skilling Guilty on Nearly all Counts: Former CEOs Convicted of Fraud, Conspiracy, Face Lengthy Prison Terms,” MSNBC, 25 de mayo de 2006, disponible en <http://www.msnbc.msn.com/id/12968481/>
- La historia de Enron está muy bien contada en el excelente documental *Enron: The Smartest Guys in the Room*, dirigido en el 2005 por Alex Gibney
- M. Lewis, “The End,” *Portfolio*, Nov. 2008. <http://www.portfolio.com/news-markets/national-news/portfolio/2008/11/11/The-End-of-Wall-Streets-Boom - page1>
- El escándalo de los títulos Terra, la malversación de cuentas de clientes y otras prácticas “turbias” en las que se ha implicado Citigroup han sido documentadas en fuentes diversas. Pueden verse resumidas en la entrada sobre Citigroup en Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Citigroup>

Nota: La versión original en inglés de este texto aparecerá en el número de marzo de 2009 de la revista *CNS—Capitalism, Nature, Socialism*

3/2009

La Biblioteca de Babel

Joaquim Sempere

Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica

Crítica, Barcelona, 2009, 268 pags.

Discutir de necesidades es una cuestión esencial para desarrollar políticas económicas y sociales frente a las amenazas de crisis ecológica y económica. Nuestro compañero Quim Sempere retorna en este libro imprescindible a reflexionar sobre lo que constituye uno de sus grandes temas de trabajo. Elabora una teoría de las necesidades en las que es posible situar los diversos factores que influyen en nuestros comportamientos de consumo y con ello contribuye a visualizar los mecanismos y procesos en los que hay que incidir para orientarnos hacia una sociedad justa, sostenible y deseable. Y ello sin caer en recetas facilonas sino mostrando la complejidad y los aspectos contradictorios de la experiencia del consumo. La única vía que nos puede permitir elaborar respuestas inteligentes a los retos del presente.

Albert Recio Andreu
3/2009

Steve Fraser y Gary Gerstle (eds.)

Ruling America. A History of Wealth and Power in a Democracy

Harvard University Press, Boston, 2005, 384 pags.

En 1984, el senador de Nueva York Daniel Patrick Moynihan exclamaba: "Al menos la mitad de los miembros del Senado actual son millonarios... Nos hemos convertido en una plutocracia... Se suponía que el Senado tenía que representar los estados; en vez de éstos, representa los intereses de clase". Desde entonces, Estados Unidos ha visto crecer la desigualdad social de forma espectacular. En un contexto mundial como el actual, donde el retroceso de conquistas democráticas y el fortalecimiento de tendencias plutocráticas han sido la norma, resulta sorprendente la escasez de estudios como *Ruling America. A History of Wealth and Power in a Democracy*. Coeditado por los historiadores Steve Fraser y Gary Gerstle, y publicado por la Universidad de Harvard, el libro se propone analizar la historia de las distintas élites políticas económicas norteamericanas y su siempre conflictiva relación con los ideales democráticos de la nación.

Desde los tiempos de la Constitución (un proyecto de las élites del momento para frenar los "excesos" democráticos de las legislaturas estatales) hasta el día de hoy (cuando, en los procesos electorales, el declive de los aparatos de partido ha hecho aumentar la desmesurada influencia de los donantes privados multimillonarios), los ocho capítulos de *Ruling America* tratan de las diferentes formas en que las sucesivas élites del país han construido su

universo social, ideológico y político en el seno de un sistema formalmente democrático. El libro no relata la historia de un triunfo total y definitivo, sin obstáculos ni tensiones. Al contrario, los autores prestan especial atención a las divisiones internas de las élites y a los desafíos —a veces sólo amenazantes, otras veces coronados con éxitos parciales— del exterior, es decir, del *demos* o pueblo llano. Las aportaciones de Michael Lind y Godfrey Hodgson se cuentan entre las mejores, aunque toda la obra bien se merecería una traducción a cualquier lengua peninsular, como primer paso para inspirar un reto similar entre los economistas e historiadores españoles.

Andreu Espasa
3/2009

Enric Prat Carvajal
Activistes de la pau⁴

Publicacions de la Abadia de Montserrat, Barcelona, 2008, 210 pags.

Enric Prat, a modo de complemento de *Moviéndose por la Paz* (Hacer, 2006), publica el estudio de campo que fundamentó una parte de ese libro. Gracias a los datos obtenidos a partir de un cuestionario realizado a 175 destacados activistas por la paz, E. Prat nos ofrece una visión interesantísima sobre las características sociológicas y políticas del movimiento por la paz catalán de los años 80 del siglo pasado. El retrato de grupo resultante es bastante nítido: la lucha por la paz, el renovado interés por el antimilitarismo y la no violencia, la reivindicación de la disolución de los dos bloques militares, fue sobre todo cosa de rojos internacionalistas, antidogmáticos y nada sectarios.

José Luis Gordillo
3/2009

En la pantalla

Sam Mendes

Revolutionary Road

2008

A través de unas imágenes que se sitúan en los años cincuenta, Sam Mendes presenta una demoledora crítica del *american way of life* a través de una ácida presentación del sistema familiar norteamericano. Una película sobre los problemas de género realizada con técnica impecable e interpretaciones soberbias, con la única reserva de que otro maquillaje no le habría ido nada mal al sempiternamente aniñado rostro de Leonardo Di Caprio.

Juan-Ramón Capella
3/2009